

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

Bogotá D.C, veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

REFERENCIA	ACCIÓN DE TUTELA
RADICACIÓN	Nº. 2022-00688
ACCIONANTE	ELOISA SEGURA ULLOA
ACCIONADO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICIA NACIONAL- SECRETARÍA GENERAL GRUPO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES.
DECISIÓN	NIEGA ACCIÓN DE TUTELA

*Procede el Despacho a resolver la acción de tutela instaurada por la señora **ELOISA SEGURA ULLOA**, en contra del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICIA NACIONAL- SECRETARÍA GENERAL GRUPO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES**.*

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO:

*La señora **ELOISA SEGURA ULLOA** interpuso acción de tutela por considerar vulnerado el derecho de petición, con fundamento en los siguientes:*

HECHOS (SÍNTESIS):

1.- Informó que el 12 de agosto de 2022 con radicado 049748 fue recepcionado el derecho de petición en la ventanilla única de correspondencia y radicación de la Dirección Nacional de la Policía Nacional.

2.- Señaló que los 15 días hábiles se cumplieron el 5 de septiembre del año en curso y que por encontrarse inmerso en la solicitud el derecho fundamental al debido proceso e igual no le aplica la prórroga como lo dispone el art. 5 del Decreto 491 de 2020.

3.- Relacionó los hechos fundamento de la solicitud elevada así:

Que en el mes de noviembre del año 2016 se concilió ante el Juzgado 35 Administrativo de Oralidad de Bogotá la demanda administrativa que había sido presentada por ARGENIS BERMUDEZ y otros contra la Policía Nacional.

El 25 de abril de 2017 se terminó de presentar toda la documental requerida ante la Secretaría General de la Policía Nacional con radicado 04977 para solicitar el pago de la suma acordada en la conciliación.

El 27 de junio de 2017 fue notificada de la asignación del turno de pago N° 157-2-2017, quedando a la espera de disponibilidad del recurso tal como se le informo en oficio 029887 de 2017.

El 7 de febrero de 2022 el grupo de ejecución de decisiones judiciales solicitó a la suscrita copia de la sentencia de primera instancia y conciliación con su fecha de ejecutoria, aún cuando hacía 4 años ya se había presentado la documentación completa. No obstante, procedió a presentar la documental solicitada el 11 de febrero de 2022 con radicado 007975.

El 14 de febrero de 2022 elevó solicitud ante la Policía Nacional para que el capitán Edguin Geney Hernández Triana atendiera de forma personal al abogado principal Marco Antonio Céspedes Segura, solicitud que tampoco fue atendida.

En el mes de mayo de 2022 se le informó por la ventanilla única del grupo de ejecuciones judiciales de la Policía Nacional que su solicitud ya se encontraba en el paquete de liquidaciones para pago.

El 12 de agosto de 2022 le fue informada en la ventanilla que nuevamente la documentación no registraba radicado en el sistema y por ende no se encontraba en proceso de pago a pesar de que en razón al Decreto 1435 de 2022 ya debió cancelarse el rubro dispuesto en la conciliación.

PRETENSIONES:

*Por lo tanto, acude la accionante al aparato judicial para que se le tutelen los derechos fundamentales vulnerados, ordenando a la **Secretaría General del Grupo de Seguimiento y Control de Procesos Judiciales de la Policía Nacional - Ministerio de Defensa Nacional** contestar de fondo la solicitud elevada el 12 de agosto de 2022.*

REGLAS DE COMPETENCIA:

Este despacho es competente para conocer del asunto, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y con los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, lo que indica que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública e incluso de particulares.

ADMISIÓN Y LITIS:

La presente acción de tutela fue admitida mediante auto de fecha trece (13) de septiembre de dos mil veintidós (2022) y se ordenó notificar a la parte accionada para que ejerciera su derecho de defensa. (Archivo N° 010 - 011)

Fenecido el término concedido, la accionada dio contestación adjuntado la respuesta dada a la accionante. (Archivo N° 013)

LEGITIMACIÓN PASIVA:

La presente acción se encuentra dirigida en contra del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICIA NACIONAL- SECRETARÍA GENERAL GRUPO DE

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES, por ser la entidad que sería responsable por la acción u omisión vulneradora del derecho objeto de la presente tutela, se encuentra legitimado el extremo pasivo.

CONSIDERACIONES:

PROBLEMA JURÍDICO:

Corresponde al Juez de tutela, determinar si a la señora ELOISA SEGURA ULLOA se le está vulnerando su derecho de petición, al no brindar la accionada respuesta a la solicitud por ella elevada y si con fundamento de ello se encuentra legitimada para formular la acción constitucional.

IDENTIFICACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL INVOLUCRADO:

DERECHO PRESUNTAMENTE VULNERADO:

Señala la accionante como conculcado, principalmente el derecho de petición. La Carta Política, lo plasma en su art. 23 como uno de los derechos constitucionales fundamentales que les asiste a las personas a fin de obtener una pronta resolución a las peticiones que de manera respetuosa se hayan elevado a cualquier entidad pública e incluso particular.

El derecho de petición, visto desde la órbita del estado social de derecho, es ante todo un garantizador de la puesta en marcha de la democracia participativa, estableciendo una efectiva relación persona - Estado, cobijando así muchos otros derechos consagrados como constitucionales como el derecho a la información y a la participación política de los coasociados.

El núcleo esencial del derecho de petición está constituido por la pronta resolución, pues de nada serviría que el ciudadano tuviera la posibilidad de dirigirse a la autoridad si no recibe de ésta una respuesta que resuelva la solicitud elevada.

La respuesta debe ser oportuna, resolverse de fondo de manera clara, precisa y en congruencia con lo solicitado y debe también ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

El caso en concreto:

Así las cosas, procede esta Juez Constitucional al estudio en sede de tutela, indicando que la accionante invoca como derecho conculcado el de petición supuestamente vulnerado por la entidad accionada.

Con el escrito de tutela se allegó la misiva dirigida al Ministerio de Defensa Nacional de la Policía Nacional – Secretaría General Grupo de Seguimiento y Control de Procesos Judiciales, formulada por la accionante EOLISA SEGURA

ULLOA en su calidad de apoderada judicial de la parte demandante dentro del proceso N° 2013-042 que cursó en el Juzgado 35 Administrativo de Oralidad de Bogotá. La radicación ante la accionada se probó por la actora con constancia de sello de recibido N° 049748 de 12 de agosto de 2022. (Pág. 7, archivo N°002)

Aunado a ello, al plenario fue aportado el poder que fue conferido por los señores EDNA LILIANA YATE BERMUDEZ, ANDREA YATE BERMUDEZ, JAIDIBER YATE BERMUDEZ, NOHORA MILENA GALEANO BERMUDEZ, DIANA CATALINA YATE BERMUDEZ, EDWIN EFRAIN YATE BERMUDEZ, NESTOR ARBEY YATE BERMUDEZ, OSCAR FABIAN YATE BERMUDEZ, AGAPITO YATE COCOMA y ARGENIS BERMUDEZ a la profesional del derecho aquí accionante ELOISA SEGURA ULLOA para que iniciara y llevara hasta su terminación el proceso ejecutivo ante la Policía Nacional. (Pág. 6, archivo N° 008)

De esta manera, acorde a la documental probatoria allegada, se observa que los titulares del derecho fundamental invocado son los señores relacionados en el párrafo que antecede, dado que fue en cuyo nombre que la apoderada aquí accionante elevó la petición de la cual arguye no ha obtenido respuesta.

Por lo tanto, será necesario entonces evaluar si la accionante carece o no de legitimación en la causa por activa.

Sobre particular, debe colegirse que al tenor del artículo 86 Constitucional y su decreto reglamentario 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse por cualquier persona directamente o “por quien actué en su nombre”, por su parte el art. 10 del citado decreto estableció la figura de la representación, admitiendo que toda persona podrá adelantar la acción de tutela “por sí misma o a través de representante”, con el debido poder expreso para ello.

Respecto del mandato, el máximo órgano constitucional ha señalado: “(...) los elementos del apoderamiento en materia de tutela, así: (i) acto jurídico formal que se concreta en un escrito, llamado poder, el cual se presume auténtico; (ii) tratándose de un **poder especial, debe ser específico**, de modo que aquel conferido para la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se **entiende otorgado para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial**; (iii) el destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional.”¹ - Negrita y subrayado fuera de texto.

En este orden de ideas, la pregunta que emerge en el presente asunto es, sí dado que, fue la apoderada judicial quien presentó la solicitud en representación de sus mandantes, la hace titular del derecho de petición que invoca conculcado. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que “la calidad de apoderado no genera ***ipso facto*** la suplantación del titular del derecho.”²

¹ Const. T-194/12 M. Cuervo.

² Const. T-575/97 J. Hernández.

Así como, en otro caso similar al aquí estudiado señaló que: “Pero además -lo que importa en este proceso- nadie puede alegar como violados sus propios derechos con base en la supuesta vulneración de los derechos de otro u otros, pues de una parte el interés en la defensa corresponde a ellos, y de otra la relación de vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, que constituye objeto de la tutela, **debe ser directa y no transitiva ni por consecuencia**.”

Así, no es válido alegar, como motivo de la solicitud de protección judicial, la causa de la causa, o el encadenamiento infinito entre causas y consecuencias, ya que, de aceptarse ello, se desquiciaría la acción de tutela y desbordaría sus linderos normativos. La violación de los derechos de otro no vale como motivo para solicitar la propia tutela.”³ – **Negrita fuera de texto.**

Igualmente, en Sentencia T-821 de 1999, se iteró que “(...) sólo le corresponde al propio interesado decidir si frente a lo que puede ser la violación de su derecho fundamental, quiere realizar o no los actos judiciales propios para que cese la vulneración. Sólo a él le corresponde decidir si interpone, por ejemplo, una acción de tutela, bien sea por sí mismo, o le otorga poder a un abogado, o si acude a la Defensoría del Pueblo.”

De lo anterior, se colige la falta de legitimidad por parte de la accionante para invocar la acción de tutela para la protección del derecho de petición, siendo titulares los señores EDNA LILIANA YATE BERMUDEZ, ANDREA YATE BERMUDEZ, JAIDIBER YATE BERMUDEZ, NOHORA MILENA GALEANO BERMUDEZ, DIANA CATALINA YATE BERMUDEZ, EDWIN EFRAIN YATE BERMUDEZ, NESTOR ARBEY YATE BERMUDEZ, OSCAR FABIAN YATE BERMUDEZ, AGAPITO YATE COCOMA y ARGENIS BERMUDEZ, pues bien, tal como quedó sentado jurisprudencialmente, la actora en su calidad de apoderada no puede atribuirse como propio un derecho que le fue vulnerado a sus poderdantes, siendo importante, advertir que dentro del trámite no se acreditó poder especial conferido a la accionante para presentar la presente acción de tutela en representación de los referidos ciudadanos.

Así las cosas, se advierte que la presente acción no reúne los requisitos mínimos exigidos para su procedencia, por lo que se denegará el amparo deprecado; entre tanto y atendiendo la falta de legitimación en la causa por activa, la juez de tutela se encuentra inhibida para emitir pronunciamiento alguno.

Por lo expuesto el amparo constitucional deprecado será negado, como en efecto se dispondrá.

POR MÉRITO DE TODAS LAS CONSIDERACIONES PLASMADAS EN LA PARTE MOTIVA DE ESTE PROVEÍDO, ESTE JUZGADO ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por la accionante **ELOISA SEGURA ULLOA**, por las razones expuestas en esta providencia.

³ Const. T-574/97 J. Hernández

SEGUNDO: NOTIFICAR de esta decisión a las partes involucradas por el medio más expedito.

TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, remítase la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

COPÍESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

SANDRA MEJÍA MEJÍA
JUEZ

*JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE
BOGOTÁ D.C.*

El anterior auto se notificó por estado No. 100

Hoy 22 de septiembre de 2022

CAROLINA SANTAMARIA LUNA
Secretaria

CJ

Firmado Por:
Sandra Mejia Mejia
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Familia 29 Oral

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5885c8c059a20577a1ff4c2e289263a8f75c6c8565a71421d78133307406e38b**

Documento generado en 21/09/2022 08:53:54 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>